

Desempleo, pobreza y exclusión. Breves notas a modo de actualización y comentario

Andrea Del Bono¹



*“Tenemos que revelarnos contra esta imposición de la
desdicha como destino y tratar de imaginar algo diferente a partir
de ciertas certezas que todavía nos quedan”*

Eduardo Galeano

Allá por noviembre de 2001, quienes asistimos a la disertación de Julio Neffa, Alfredo Monza y Miguel Murmis, volvimos a recorrer uno de los caminos más transitados durante los años noventa en ámbitos académicos nacionales, una vez más, se nos invitaba a reflexionar sobre algunos de los aspectos centrales que caracterizaron el comportamiento del mercado de trabajo argentino durante el último decenio. Aquella fue también una invitación a participar del intenso debate, ya firmemente instalado en nuestro país, en torno a los factores que contribuyen a explicar el deterioro registrado en el mercado de trabajo local.

Una serie de elementos, empíricamente inobjectables, fueron presentados entonces como punto de partida de la discusión. Políticas neoliberales mediante, la transformación estructural de la Argentina de los noventa dejó como saldo una situación terriblemente preocupante: un elevado incremento del desempleo, el subempleo, el sobreempleo y de los empleos precarios, una fuerte caída de las remuneraciones reales, y un marcado deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de gran parte de la población (Santarcángelo y Schorr, 2001).

En un plano más general, los distintos análisis que se desplegaron en aquel encuentro intentaron dar cuenta de las transformaciones estructurales

¹ Profesora Adjunta (a cargo) Seminario-Taller “Sociología del Trabajo”. Investigadora del Conicet (Ceil-Piette) adelbono@ceil-piette.gov.ar

que se produjeron en el país en los últimos treinta años y de cómo éstas contribuyeron a reconfigurar casi completamente las bases de la sociedad. Este proceso signado por el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social, que se inicia en la década del setenta con la última dictadura militar, registra un punto de inflexión durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem, y una aceleración mayor a partir de 1995, con la acentuación de la recesión económica y la entrada a la desocupación masiva.

Durante los últimos años de la década del noventa, “un enorme contingente de trabajadores fue expulsado del mercado de trabajo formal, mientras que otro sufrió las consecuencias de la precarización o buscó refugio en las actividades informales, como estrategia de supervivencia” (Svampa y Pereyra, 2003: 12). La “descolectivización” ha sido, señalan estos autores, uno de los resultados del desmantelamiento sostenido de todo un conjunto de instituciones que hacían factible la inclusión de un amplio sector de los trabajadores urbanos garantizando cierto grado de protección social, no pocos derechos sociales, y estabilidad laboral.

Caracterizan a aquellos largos años de aplicación de políticas económicas conservadoras, profundas transformaciones en la condición ciudadana – estrechamiento y nominalidad– y ataques a “lo público” que marcan una dinámica que encerró al mismo concepto de empleo –identificado históricamente con el pleno empleo– en un callejón sin salida y que le ha empujado hacia una huida por los caminos del privatismo y la fragmentación social (Alonso, 2000). El problema de la crisis de lo público (público/colectivo vs. privado/particular), y por lo tanto de la esencia del Estado de bienestar mismo, enmarca la situación del empleo actual.

Algunos de estos temas se derivan, o están presentes, en las exposiciones que escuchamos aquel día cuando todavía ni siquiera se vislumbraba la magnitud que habría de alcanzar la inédita crisis institucional, social y económica que se desató poco después; no imaginábamos tampoco el fuerte impacto que esa situación habría de ejercer sobre el mercado de trabajo de nuestro país, así las cosas, cada uno de los panelistas dejó planteado algún interrogante: *¿cuáles son las causas que explican la catastrófica evolución del mercado de trabajo durante la década pasada?, ¿con qué tipo de estrategia de crecimiento económico se conseguiría frenar el aumento del desempleo y de la desprotección social?* Aún aceptando que la sociedad de pleno empleo ya se ha extinguido y en función de esta realidad, ¿no resulta imprescindible reflexionar acerca de

modos alternativos de sostener la democracia e, incluso, la construcción de identidades más allá del trabajo? ¿Qué destino tendrán los desempleados y de qué manera sus necesidades económicas se articulan con sus derechos sociales y políticos? Y finalmente, ¿qué tipo de políticas y programas específicos podrían ponerse en marcha para subsanar, aunque más no sea parcialmente, la problemática planteada?

No estábamos, entonces, en condiciones de prever que lo peor estaba aún por venir. Cesación de pagos de la deuda, devaluación de la moneda, terremoto social. La economía se desplomó, y la tasa de desocupación siguió incrementándose hasta llegar a su pico histórico del 21,5% de la población económicamente activa en mayo de 2002, sumando a 3 millones de personas en todo el país; entre mayo de 2001 y mayo de 2002 se destruyeron 750 mil puestos de trabajo. Considerando no sólo la desocupación sino también la subocupación (18,6%), había para esa fecha más de 5 millones de personas con graves problemas de inserción en el mercado laboral.²

Luego de 48 meses de recesión, una de las tendencias más preocupantes de la evolución del mercado de trabajo local volvió a quedar al descubierto con particular crudeza, más allá de la disminución neta del empleo, la precarización existente. Esto es, se profundizó el deterioro de la calidad de los empleos que ya era moneda corriente en los últimos años: destrucción de empleos formales seguida, en caso de reemplazo, de la creación de trabajo informal con menor retribución y mayor carga horaria. El poder disciplinador del mercado, el miedo al azote de la desocupación —un temor que es vivido “en carne propia”, individualmente—, lleva a quienes tienen la suerte de no ser despedidos o de encontrar un trabajo a aceptar desempeñarse en ocupaciones cada vez más informales y peor pagas. Los datos del INDEC de mayo de 2002, consignaron que el 25,7% de los ocupados recibían ingresos inferiores o iguales a \$ 200 por mes, un valor menor al costo de la canasta básica de alimentos. Asimismo, el 57% de los ocupados eran trabajadores precarios: asalariados sin jubilación; subocupados; temporarios o de changas; servicio doméstico; cartoneros y vendedores ambulantes.

La gravedad de la crisis, los efectos del paso de la deflación a la inflación y del congelamiento de salarios, quedó reflejada en la coincidencia entre el pico máximo de desocupación alcanzado en el país y un fuerte aumento de la pobreza. Las cifras del INDEC confirmaron los peores pronósticos, en mayo de 2002, se

² Instituto Nacional de Estadísticas y Censos — Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mayo de 2002.

registró en el aglomerado Gran Buenos Aires –Ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano– un nivel de pobreza del 49,7%, que alcanzó en junio el 52,8%. Entre mayo de 2001 y el mismo mes de 2002, en Capital y Gran Buenos Aires, 2.1 millones de personas se convirtieron en pobres y dentro de ese grupo los indigentes aumentaron en 1.5 millones. Los pobres de la región sumaron 6 millones de personas y los indigentes 2.7 millones. Según datos para todo el país, el 53% de la población de los aglomerados urbanos relevados por el INDEC era pobre, mientras que la indigencia comprendía al 24,8% de la población. En las áreas urbanas, 12.5 millones de personas eran pobres y 5.8 indigentes.³

Entre octubre de 2001 y el mismo mes de 2002, se incorporaron al mercado de trabajo de los 31 aglomerados 311 mil personas,⁴ entre ocupados y desocupados. Las tasas de empleo y desocupación se mantuvieron relativamente estables, pasando del 34,5% al 35,3% y del 18,3% al 17,8%, respectivamente. Pero esta cifra, significativamente por debajo del 21,5% de mayo, e incluso con una leve mejora respecto del 18,3% registrada en octubre de 2001, tuvo mucho que ver con la incidencia del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, implementado por Eduardo Duhalde a mediados de 2002. De los casi 2 millones de beneficiarios a nivel nacional, el INDEC consideró como ocupados a 583 mil personas que realizaban alguna contraprestación por el subsidio mensual de \$ 150, lo cual afectó sustancialmente a las tasas de empleo y de desocupación. Según informe oficial del INDEC, si todas las personas que tenían como ocupación principal al Plan hubiesen sido considerados desocupados, la tasa de desempleo hubiera llegado al 23,6%, superando a la del mes de mayo anterior. La inclusión de estos beneficiarios como parte de la población ocupada es, por supuesto, sumamente cuestionable; quienes perciben el Plan realizan en general actividades de escasa calificación y baja productividad, carecen de aportes previsionales y perciben un subsidio que no llega a cubrir una canasta básica de alimentos.

En octubre de 2002,⁵ las cifras oficiales del INDEC reflejaron un pico histórico de los alcances de la pobreza en nuestro país, un 57,5% de las personas residentes en áreas urbanas era pobre, mientras que la indigencia alcanzó al

³ INDEC, Incidencia de la pobreza y de la indigencia en los aglomerados urbanos, mayo de 2002.

⁴ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Encuesta Permanente de Hogares (EPH), octubre de 2002.

A partir del relevamiento del mes de octubre del 2002 la EPH sumó tres aglomerados a los 28 habituales: Rawson –Trelew, San Nicolás –Villa Constitución y Viedma – Carmen de Patagones.

⁵ INDEC, Incidencia de la pobreza y de la indigencia en los aglomerados urbanos, octubre de 2002.

27,5% de la población. Estos porcentajes significan que, para octubre de 2002, se encontraban por debajo de la línea de pobreza 3.198.000 hogares, los que incluyen 13.870.000 personas. En ese conjunto, 1.363.000 hogares se encontraban, a su vez, bajo la línea de indigencia, lo que supone 6.638.000 personas indigentes. Las cifras para el aglomerado de Gran Buenos Aires revelaron, asimismo, que sobre el total de la población del aglomerado en el período de la medición, el 54,3% era pobre y el 24,7% indigente.

Acompañando los buenos presagios de cierto aire de reactivación económica, la desocupación en el mes de mayo último se ubicó en el 15,6%, por debajo del 17,8% de la mediación anterior de octubre de 2002.⁶ Con estas cifras, oficialmente hay 2.202.000 desocupados, 307 mil menos que en octubre de 2002. Aunque en la economía real los indicadores del mercado laboral experimentaron una mejoría leve, los números cambian si también se consideran como desocupados a las personas cuya ocupación principal proviene de un Plan Jefes y Jefas, en este caso la desocupación alcanzaría el 21,4%, un valor casi idéntico al histórico del 21,5% alcanzado en mayo de 2002. Si se consideran los 2.202.000 desocupados y los 2.652.000 subocupados, 4.855.000 personas tienen problemas de empleo en la Argentina –casi el 35% de la población económicamente activa de las áreas urbanas.

Ahora bien, la desocupación de mayo fue inferior al 23,6% que se registraba sin considerar los subsidios oficiales en octubre del año pasado. Este descenso se explica por la creación genuina de empleo ya que también aumentó la cantidad de gente que salió a buscar trabajo; respecto a octubre de 2002, se crearon 364 mil puestos de trabajo. De acuerdo con información del Ministerio de Economía, la creación de empleo genuino se aceleró entre octubre de 2002 y mayo de 2003, período durante el cual el 78% de los 364 mil puestos de trabajo se originaron fuera del Plan Jefes y Jefas de Hogar. En contraposición, prácticamente la mitad de los empleos del período mayo 2002-octubre 2002 pertenecían a ese programa.

Sin embargo, otros datos suministrados por el INDEC nos permiten matizar este panorama aparentemente alentador, el hecho de que la subocupación casi no se haya reducido –apenas disminuyó del 13,8% en octubre al 13,4% en mayo– estaría confirmando la precariedad de los nuevos puestos de trabajo:



⁶ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mayo de 2003.

empleos inestables, de bajos ingresos –tan magros que siguen sin escapar a la indigencia o la pobreza– y sin beneficios sociales, correspondientes a asalariados “en negro”, ubicados en el sector informal de la economía y cuentapropistas.

En cuanto a los datos que dan cuenta de la pobreza y la indigencia, las cifras del INDEC revelan un leve descenso.⁷ En mayo de este año, era pobre el 54,7% de la población de los residentes en áreas urbanas, lo que representa una disminución de 2.8 puntos con relación al pico histórico alcanzado en octubre de 2002, sin embargo, el nuevo porcentaje continúa siendo superior a los valores correspondientes a mayo de ese mismo año (53%). Asimismo, la indigencia se redujo desde el 27,5% de octubre de 2002, al 26,3% de la población de los aglomerados urbanos relevados por el INDEC. Según proyecciones para todo el país, estaríamos hablando de 18.8 millones de pobres en las áreas urbanas y de algo más de 9 millones de indigentes. En el aglomerado Gran Buenos Aires, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza descendió del 54,3% en octubre de 2002 al 51,7% en mayo del presente año, pero la indigencia aumentó del 24,7% al 25,2%. Cierta estabilidad en los precios, el aumento de los empleos genuinos –por fuera del Plan Jefes y Jefas de Hogar– y la lenta recuperación de los indicadores del mercado laboral desde niveles muy deprimidos, son algunos de los factores que explican la leve mejora del grave cuadro social.

A partir de este breve pantallazo, tan sólo una somera actualización de la información que se presentó durante las disertaciones de noviembre de 2001, vale la pena retomar las cuestiones que quedaron planteadas entonces. Cuando todo parece indicar que comenzamos a dejar atrás el cataclismo que se desató sobre nosotros –fatídica combinación entre ajuste malthusiano de mercado y darwinismo social–, y cuando la economía argentina comienza a ponerse lentamente en marcha, la evolución reciente del mercado de trabajo local nos sitúa prácticamente en la misma discusión, quizás renovada por el dramatismo de los hechos vividos durante este último año y medio. ¿Cómo responder a las esperanzas de las personas de tener un buen trabajo, un trabajo decente, y una mejor calidad de vida? ¿Cómo tender puentes entre la economía y la sociedad, sin postergar la una por la otra? ¿Cómo conciliar los objetivos estabilizadores con la protección social que reclaman amplios sectores de la población de nuestro país? Esto representa, sin duda, un desafío de gran magnitud y de largo aliento.



⁷ INDEC, Incidencia de la pobreza y de la indigencia en los aglomerados urbanos. mayo de 2003.

Según consigna la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en su XV Reunión Regional Americana,⁸ el panorama del mercado laboral de América Latina llegó en 2002 a las cifras más negativas de los últimos 22 años. La caída del PIB de la región -0,8%, elevó el desempleo al 9,2% durante ese año, sobre el registrado en la crisis de la deuda de comienzos de los años ochenta, mientras creció el sector informal y disminuyeron la productividad y el salario mínimo. Para enfrentar esta situación, resulta imprescindible asegurar un compromiso político mundial para crear más “trabajo decente” que permita vivir con dignidad. Mientras el objetivo principal de las políticas aplicadas en la región, señala la OIT, sean sólo los grandes equilibrios macroeconómicos, concebidos como equilibrios financieros y monetarios, y no la necesidad de invertir para crear empresas y trabajo, la situación actual no ha de variar sustancialmente. Lo primero es, entonces, encontrar una salida productiva a la crisis para así reabsorber parte de la informalidad, lo segundo, concentrarse en la pequeña, mediana y microempresa. Es decir, abandonar el enorme énfasis que las políticas aplicadas en la región han puesto en lo global, en la apertura, sin casi ninguna preocupación por lo local, puesto que es allí, en esa dimensión, donde vive la gente, se crean las empresas y se genera el consumo. Pero nada de todo esto, es nuevo...

Tampoco es un hecho novedoso –volviendo a la evolución del mercado de trabajo de nuestro país– que, tal como ha vuelto a hacerse evidente en las cifras de la EPH de mayo de este año, estamos frente a un mercado laboral caracterizado por el predominio de puestos de trabajos precarios, inestables y sin cobertura social, en el que las bajas remuneraciones afectan cada vez a mayor cantidad de personas. En este sentido, y aunque no hemos querido entrar aquí en este debate, ¿qué otra cosa, sino un desocupado, es una persona que cobra un subsidio de \$ 150 y aprovecha esa ayuda para sobrevivir y para salir a buscar una changa?

Claro está, si nos situamos en el mediano y largo plazo, el papel de la política social no es el de sacar a la Argentina de la situación de crisis actual, quizás sea posible que pueda amortiguar sus efectos, pero la responsabilidad está en crear puestos de trabajo de calidad. En palabras de Beccaria (2002), “es difícil pensar en revertir al menos parte de este proceso de deterioro social sin la creación de puestos de calidad”, los empleos precarios “son una solución a

⁸Véase: “América Latina no puede vivir en un ajuste permanente”, entrevista realizada por Manuel Defano a Juan Somavía, Director General de la OIT, en *El País*, Suplemento Económico, 15 de diciembre de 2002. También, para el concepto de “trabajo decente”, *Informe sobre el Empleo en el Mundo 2001*, OIT, 2002.

corto plazo, ya que mantienen a los individuos en el circuito de la inestabilidad”. ¿Pero cómo conseguir este objetivo? Tal como señalara Alfredo Monza en su disertación, se ha analizado y escrito abundantemente acerca de la relación inversa entre la evolución de algunos indicadores de crecimiento económico y la de las tasas de desempleo; asimismo, según destacó Julio Neffa, se ha discutido abundantemente la influencia de la legislación laboral (más o menos flexible) para revertir (o no) la baja oferta de empleo. La discusión, sigue abierta...

Pero por más grave que sea la situación actual o, quizás justamente por eso, es bueno no perder de vista la reflexión acerca de la calidad de trabajo realmente existente y del trabajo que vendrá. Esta es una cuestión que va más allá de las preocupaciones sobre la cantidad de trabajo disponible en nuestra sociedad y que reclama un análisis exhaustivo de las nuevas formas de actividad emergentes.

En este sentido, dos realidades contrapuestas son posibles. La primera, el desarrollo de “buenos” trabajos: estables, con protección social, bien remunerados, en los que los empleados puedan ejercer cierta cuota de autonomía y responsabilidad, control sobre su tiempo de trabajo, sobre su espacio, en definitiva, con un alto grado de control sobre la organización de su actividad y de su propia vida (Durand, 1998). La segunda, nuevas formas de producir –por lo tanto de trabajar– que van unidas, con demasiada frecuencia, a bajos salarios, extrema flexibilidad, precariedad, inestabilidad y, finalmente, a la intensificación del trabajo, al empobrecimiento del contenido de las tareas y a la insatisfacción laboral (y personal), en términos de Altamn y Del B (1998), a la multiplicación de “malos” trabajos.

En el caso argentino, la multiplicación de malos trabajos nos volverá a situar, una y otra vez, en el mismo laberinto en el que nos encontramos hoy: un mercado de trabajo erigido sobre puestos de trabajo de baja calidad unidos a trayectorias laborales inestables, signadas por un movimiento zigzagueante entre desocupación y trabajo precario, que conducen hacia la incertidumbre en el ingreso y la falta de cobertura social y, finalmente, “no sólo al aumento de la pobreza, sino también de su intensidad” (Beccaria, 2002). Si hay algo de cierto en que, hoy por hoy, tenemos la posibilidad de trazar un nuevo rumbo para el destino de nuestro maltratado país, será bueno no perder de vista estas cuestiones. Como así también, y esto es algo verdaderamente importante, asumir que las medidas que finalmente se adopten para combatir el desempleo, o la pobreza, “no pueden ser fruto del arrastre de un grosero determinismo económico y

tecnológico, sino producto de la decisión de los actores sociales que tratan de ser soberanos sobre sus propios destinos, de lo contrario las reformas sociales se convertirán bajo su apariencia racional en simples repartos de la miseria” (Alonso, 1999: 178).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Altman, N. y Del B, M. (1998), “Productivity by Systemic Rationalization: Good Work-Bad Work?”, en *Economic and Industrial Democracy*, vol. 19, nº 1, pp. 137-159.
- Alonso, L., (2000), *Trabajo y posmodernidad: el empleo débil*, Madrid, Editorial Fundamentos, pp. 261.
- Alonso, L., (1999), *Trabajo y ciudadanía*, Madrid, Editorial Trotta, pp. 281.
- Beccaria, L. (2002), “Hay que crear empleos de calidad”, conferencia pronunciada en el ciclo La Universidad Hoy, UNLP, [www. cambiocultural.com.ar](http://www.cambiocultural.com.ar).
- Durand, J.P. (1998), “Is the ‘better job’ still possible today?”, *Economic and industrial democracy*, vol. 19, nº 1, pp. 185-198.
- Santarcángelo, J. y Schorr M. (2001), “Dinámica laboral en la Argentina durante los años noventa: desocupación, precarización de las condiciones de trabajo y creciente inequidad distributiva”, en 5to. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, formato CD.
- Svampa, M. y Pereyra, S., (2003), *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Editorial Biblos, pp. 230.